



Bogotá D.C., 1 de agosto de 2023

Honorable,
GREGORIO ELJACH PACHECO
Secretario General
Senado de la República

Asunto: Proyecto de Ley __ de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Respetado Secretario:

En nuestra condición de Congresistas de la República de Colombia, radicamos el presente Proyecto de Ley con el objeto de modificar algunos artículos del Código Civil para permitir el divorcio por la sola voluntad de una de las partes e incluir otras disposiciones.

De tal forma, presentamos a consideración del Congreso de la República este proyecto de ley **"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**, con el fin de iniciar con el trámite correspondiente y cumplir con las exigencias dictadas por la Constitución y la ley.

Cordialmente,

 <p>KATHERINE MIRANDA PEÑA Representante a la Cámara por Bogotá Partido Alianza Verde</p>	 <p>DAVID LUNA SÁNCHEZ Senador de la República</p>
---	---



PROYECTO DE LEY NÚMERO DE 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Congreso de Colombia

DECRETA

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil una causal que permita el divorcio por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges y dictar otras disposiciones.

ARTÍCULO 2. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 154 del Código Civil, como numeral 10, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 154. CAUSALES DE DIVORCIO. Son causales de divorcio:

(...)

10. La sola voluntad de cualquiera de los cónyuges".

ARTÍCULO 3. Modifíquese el artículo 156 del Código Civil, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 156. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. El divorcio sólo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan, con excepción de lo previsto en el presente artículo con respecto a la causal 10 del artículo 154.

La demanda de divorcio podrá presentarse en cualquier tiempo, sin límites de caducidad.

Cuando se pretenda la obtención de reparaciones económicas o cualquier otro tipo de sanciones deberá presentarse la solicitud sobre reparaciones económicas o sanciones, dentro del término de dos (2) años, contados desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales 1a. y 7a. del artículo 154 o desde cuando sucedieron, respecto a las causales 2a., 3a., 4a. y 5a. del artículo 154. En todo caso, la demanda de divorcio que no contenga fines económicos o de sanciones, podrá presentarse en cualquier tiempo.

La causal 3ª del artículo 154 cuando fuere debidamente probada dará lugar a reparaciones económicas y simbólicas a favor de la persona víctima de violencia

intrafamiliar que la alega. Las compensaciones serán declaradas en la sentencia de divorcio, aun de oficio.

Respecto a la causal 10ª cualquiera de los cónyuges podrá presentar la demanda de divorcio en cualquier momento, la cual deberá ser acompañada de una propuesta de divorcio que contenga las medidas que hayan de regular los efectos derivados del mismo. El demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta.

PARÁGRAFO. La propuesta de divorcio contendrá, si es el caso: disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias entre ellos, reparaciones económicas y/o simbólicas, indemnizaciones y sobre la liquidación de la sociedad conyugal.

Si hubiere hijos, la propuesta deberá contener la forma cómo contribuirán los padres a su crianza, educación y establecimiento, precisando la cuantía de la obligación alimentaria, conforme al artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia, indicando lugar y forma de su cumplimiento y demás aspectos que se estimen necesarios; custodia y cuidado personal de los menores y régimen de visitas y su periodicidad; primando siempre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

El juez deberá revisar de oficio la asignación de la obligación alimentaria propuesta por las partes en el caso de encontrarse involucrados menores de edad y la asignación de obligaciones alimentarias entre las partes, a fin de verificar si uno de los cónyuges carece de medios para la subsistencia.

En todo caso, el juez podrá proponer fórmulas de arreglo alternativas a las propuestas presentadas por las partes, siempre que se garanticen los derechos de alimentos de los menores de edad y del cónyuge que carezca de medios de subsistencia.

PARÁGRAFO. Los contrayentes que suscriban capitulaciones matrimoniales podrán regular el tema de las indemnizaciones por terminación unilateral del matrimonio.

ARTÍCULO 4. Modifíquese el artículo 160 del Código Civil, el cual quedará así:

ARTÍCULO 160. EFECTOS DEL DIVORCIO. Ejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil, así mismo, se disuelve la sociedad conyugal, pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí, salvo que haya mediado renuncia voluntaria a los mismos.

Cuando el divorcio fuere solicitado bajo la causal 10ª el demandado sólo podrá oponerse al contenido de la propuesta de divorcio, proponiendo una distinta, o bien demandar en reconvencción cuando la parte actora haya incurrido en alguna de las causales 1, 2, 3,



4, 5 y 7 contempladas en el artículo 158 del Código Civil.

En todo caso, el juez evaluará el contenido de ambas propuestas para verificar que se garanticen los derechos de las partes involucradas, de los hijos e hijas, procurando la obtención de un acuerdo. Y en este último, se acogerá a las medidas procesales y probatorias propias de la causal alegada en la reconvencción.

A falta de acuerdo entre los cónyuges el juez determinará las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la sentencia de divorcio, de acuerdo con el inciso primero de este artículo.

ARTÍCULO 5. ALIMENTOS PARA DIVORCIO INCAUSADO. Adiciónese un numeral nuevo al artículo 411 del Código Civil, como numeral 11, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 411. Se deben alimentos:

(...) 11). Al cónyuge al que por ocasión de divorcio tramitado bajo la causal 10ª, carezca de medios para la subsistencia".

ARTÍCULO 6. EXTENSIÓN DE APLICACIÓN A DIVORCIOS POR MUTUO ACUERDO Y DISOLUCIÓN DE UNIONES MARITALES DE HECHO. En cuanto sea pertinente, las disposiciones relativas a los efectos del divorcio de que trata el numeral 10 del artículo 154, serán aplicables al divorcio de común acuerdo ante el juez o notario y en caso de disolución definitiva de la unión marital de hecho informal o por acuerdo de cesación de efectos civiles de esta unión; en lo relativo a los derechos y deberes personales y con los hijos, el régimen económico derivado de la unión y las reparaciones e indemnizaciones.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

 <p>KATHERINE MIRANDA PEÑA Representante a la Cámara por Bogotá Partido Alianza Verde</p>	 <p>DAVID LUNA SÁNCHEZ Senador de la República</p>
---	---

SENADO DE LA REPUBLICA

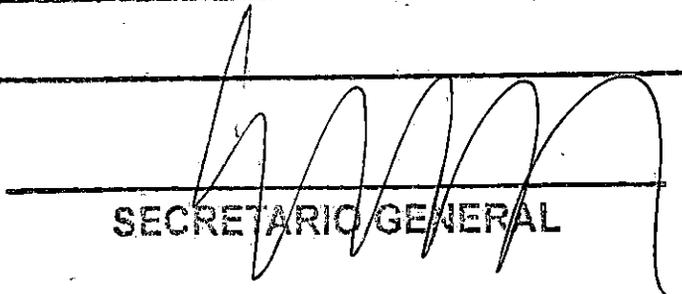
Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 02 del mes Agosto del año 2023

se radicó en este despacho el proyecto de ley
Nº. 064 Acto Legislativo Nº. _____, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales
por: H.S. David Luna Sanchez H.R. Katherine Miranda

Peña


SECRETARIO GENERAL



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE LEY NÚMERO DE 2023

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PERMITE EL DIVORCIO POR LA SOLA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.

1. OBJETO

El proyecto de Ley tiene por objeto incorporar a la legislación civil el denominado ***divorcio incausado*** en virtud del cual se permite el divorcio, sin culpabilidad, por la sola manifestación de la voluntad de cualquiera de los cónyuges. Para tal fin, modifica la normatividad vigente en esta materia.

Esta propuesta parte de una concepción de respeto por la dignidad humana y en atención a los principios constitucionales de libertad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía de la voluntad.

2. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

El Proyecto de Ley fue justificado por sus autores en los siguientes términos:

PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER

La ausencia de una causal que le permita a los ciudadanos colombianos divorciarse por la voluntad de una de las partes, limitando el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana. El Proyecto también busca crear una nueva causal para aquellos ciudadanos que, aun teniendo causales objetivas y subjetivas que justifican su divorcio, deciden no invocarlas por respeto a su intimidad o por cualquier otra circunstancia.

Las disposiciones normativas vigentes sobre el divorcio se basan en un concepto de culpabilidad y en unas causales taxativas para la terminación del vínculo jurídico matrimonial que no contemplan la manifestación unilateral de la voluntad de uno de los cónyuges como razón suficiente para la solicitud del divorcio.

CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA

El presente proyecto busca reformar disposiciones del Código Civil, específicamente el artículo 154 que establece las causales de divorcio al agregar la causal unilateral para poder solicitarlo. De igual manera, se agrega la forma en que deberá alegarse esta causal, la propuesta de divorcio del cónyuge solicitante, y se establece el régimen de alimentos que se seguirá en los casos en que uno de los cónyuges no tenga medios de subsistencia.



Este proyecto de ley atiende a una necesaria reinterpretación de la institución del matrimonio desde una perspectiva social y cultural que va de la mano de una sociedad diversa y pluralista moderna.

EL DIVORCIO EN COLOMBIA

ANTECEDENTES.

Los antecedentes del divorcio en Colombia se remontan inclusive al año 1853, año en el que se consideró la separación entre Iglesia y Estado, y así mismo, se profirió la denominada Ley Obando, la cual permitía la cesación de los efectos del matrimonio por muerte o por divorcio. Desde ese entonces se pueden determinar causales objetivas y subjetivas del divorcio como las existentes actualmente (Manotas, R.P, 2020). Sin embargo, para lo que nos compete en el presente proyecto de ley trataremos las causales actuales, su origen y la necesidad de crear una sola causal que permita el divorcio incausado en Colombia.

Los fines del matrimonio

La ley, la jurisprudencia y la doctrina han desarrollado de manera clara los fines del matrimonio. Estos se circunscriben a tres deberes en cabeza de los cónyuges relacionados con vivir juntos, procrear, y auxiliarse mutuamente, los cuales no pueden ser negociados, ya sea para incluir o excluir obligaciones (Sentencia T-574/2016).

De igual manera, resulta pertinente mencionar la forma en que surgen estas obligaciones, las características del contrato de matrimonio y los efectos del mismo (Sentencia C-394/17):

"La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el matrimonio civil es un contrato solemne que genera derechos e impone deberes recíprocos a los cónyuges, es decir, es un acto constitutivo de familia que genera deberes en cabeza de los cónyuges". Ello es así en tanto el artículo 113 del Código Civil dota de naturaleza contractual al matrimonio, asignándole un alcance bilateral habida cuenta que los consortes acuden a él de forma libre y se unen por mutuo consentimiento con la finalidad de vivir juntos, procrear y auxiliarse. A partir de la definición dada por la ley, la doctrina sostiene que el matrimonio se caracteriza por ser un contrato: bilateral, porque una vez celebrado se constituye en fuente de derechos y obligaciones recíprocas entre los esposos, solemne, pues para su validez requiere el cumplimiento de ciertas y precisas formalidades especiales, puro y simple, ya que los derechos y obligaciones que surgen del mismo no pueden someterse a plazo o condición, de tracto sucesivo, por cuanto sus obligaciones se deben cumplir mientras perdure el matrimonio, y finalmente, en la actualidad, el entendimiento igualitario constitucional permite advertir que el matrimonio tiene una condición de diversidad en sus contrayentes. De acuerdo pues con su régimen jurídico especial, el contrato matrimonial produce dos tipos de efectos: (i) los efectos de orden personal, que tienen que ver con los derechos y obligaciones que surgen entre los cónyuges y en



relación con los hijos; y, (ii) los efectos de orden patrimonial, consecuencia de la existencia de la sociedad conyugal o comunidad de bienes que se forma con ocasión del matrimonio”.

Los fines del divorcio

Los fines del matrimonio resultan ser lo más altruistas y solemnes de nuestra vida en sociedad. Se ha visto, hasta ahora, en esta ponencia cómo surgen las obligaciones del matrimonio, su solemnidad y sus fines, características que a la larga terminan por justificar la necesidad de proteger esta institución, considerada por muchos de nosotros como pilar fundamental de nuestra vida en sociedad. Sin embargo, hemos ido comprendiendo a lo largo de los años, que esas virtudes del matrimonio no son causal suficiente para obligar a los cónyuges a hacer prevalecer un vínculo matrimonial en contra de su voluntad, u obligarlo a permanecer en vida conyugal cuando no quisiera hacerlo, reconocido así por la ley y la jurisprudencia en distintas ocasiones. El divorcio surge entonces como figura para permitir terminar el vínculo matrimonial.

La actora de la demanda de constitucionalidad de la Sentencia C-394 del año 2017, resumió con claridad esta posición al determinar que la finalidad del divorcio no es otra que *“disolver el vínculo matrimonial y con ello permitir que los cónyuges restablezcan sus vidas en aras de que cada uno pueda desarrollarse libremente como persona y escoger su estado civil”* (Sentencia C-394/2017), posición que se comparte, pues de no reconocerse como tal, sería una limitación directa al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía individual.

Los nuevos supuestos de la entrante Constitución Política se promulgó la Ley 25 de 1992, en la que se determinaron las siguientes causalés para poder solicitar el divorcio o la cesación de los efectos del matrimonio (Ley 25 de 1992):

Artículo 6. *El artículo 154 del Código Civil, modificado por la Ley 1 de 1976, quedará así:*

- 1. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges,*
- 2. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les impone como tales y como padres.*
- 3. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra.*
- 4. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges.*
- 5. El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica.*
- 6. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial.*



7. *Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente, o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo.*

8. *La separación de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por más de dos años.*

9. *El consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por éste mediante sentencia”.*

La jurisprudencia y la doctrina, de manera acertada, han clasificado estas causales como objetivas y subjetivas. A las causales 6, 8 y 9, se les conocen como objetivas y se relacionan con la ruptura de lazos afectivos que pueden motivar al matrimonio, por ello, como bien menciona la Corte Constitucional en la Sentencia C-985 de 2010, al divorcio que surge como consecuencia de dichas causales se le conoce como divorcio remedio. Estas pueden ser invocadas en cualquier tiempo por cualquiera de los cónyuges y no le compete al juez realizar valoraciones sobre eventuales responsabilidades (Sentencia C-985, 2010).

Por otro lado, a las demás causales determinadas en el código civil se les conoce como causales subjetivas porque se relacionan con el incumplimiento de los deberes del matrimonio. En este caso, estas causales sólo pueden ser invocadas por el cónyuge inocente, dentro del término de caducidad. De igual manera, el juez realiza una valoración de la eventual responsabilidad del cónyuge culpable, y por ello al divorcio invocado con estas causales se le conoce como divorcio sanción (Sentencia C-985, 2010). Además, la Corte Constitucional (2010) menciona que la ocurrencia de las causales subjetivas debe ser demostrada, posición ante la cual el cónyuge podrá ejercer su derecho a la defensa, en los siguientes términos:

“(...) el cónyuge en contra de quien se invocan puede ejercer su derecho de defensa y demostrar que los hechos alegados no ocurrieron o que no fue el gestor de la conducta. Además de la disolución del vínculo marital, otras de las consecuencias de este tipo de divorcio son la posibilidad (i) de que el juez imponga al cónyuge culpable la obligación de pagar alimentos al cónyuge inocente –artículo 411-4 del Código Civil; y (ii) de que el cónyuge inocente revoque las donaciones que con ocasión del matrimonio haya hecho al cónyuge culpable –artículo 162 del Código Civil. Pertenecen a esta categoría las causales descritas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del artículo citado”.

En conclusión, el divorcio, generalmente asociado con la terminación de la vida familiar, no es otra cosa que una “alternativa” para poner fin a una relación conyugal que se ha deteriorado y, por lo tanto, como ocurre en otro tipo de contratos, al finalizarse se determinan las distintas obligaciones que tienen los cónyuges entre sí, para sus hijos y las eventuales responsabilidades que puedan surgir dentro del matrimonio y como consecuencia del divorcio.

Necesidad de una nueva causal

Como se mencionó anteriormente, a pesar que existen causales y posibilidades para acceder al divorcio en Colombia, no existe una causal que permita a los cónyuges divorciarse por la voluntad de uno de ellos, lo que en nuestro criterio termina por limitar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, tal y como se ha reconocido por la Corte Constitucional, al determinar que *“obligar a una persona a permanecer casada aún en contra de su voluntad restringe de manera drástica sus derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad a la dignidad en su faceta de autodeterminación”* (Sentencia C-985 de 2010).

En la misma sentencia la Corte menciona lo siguiente (Sentencia C-985 de 2010, 2010):

“Para la Corte la dignidad humana, el principio del libre desarrollo de la personalidad y la inalienabilidad de los derechos de la persona de los cónyuges, constituyen criterios de interpretación suficientes para afirmar que no se les puede obligar a mantener el vínculo matrimonial en contra de su voluntad e interés, por las mismas razones por las cuales resulta imposible coaccionarlos para que lo contraigan, aunadas con el imperativo constitucional de propender por la armonía familiar, necesariamente resquebrajada cuando un conflicto en la pareja conduce a uno de sus integrantes, o a ambos, a invocar su disolución.” (...)

En ese sentido, las disposiciones normativas vigentes sobre el divorcio se basan en un concepto de culpabilidad y en unas causales taxativas para la terminación del vínculo jurídico matrimonial que no contemplan la manifestación unilateral de la voluntad de uno de los cónyuges como razón suficiente para la solicitud del divorcio. Esta situación afecta los derechos de los ciudadanos que sin tener una causal objetiva o subjetiva de divorcio quisieran acceder al fin del vínculo matrimonial, pero también para aquellos que, aun teniendo causales objetivas y subjetivas que justifican su divorcio, deciden no invocarlas por respeto a su intimidad o por cualquier otra circunstancia.

Por otro lado, si se analiza la legislación de otros países se podrá notar que existe una clara tendencia a privilegiar que cualquiera de los cónyuges está facultado para solicitar la disolución del vínculo matrimonial de manera unilateral, e inclusive a eliminarse las causales subjetivas del divorcio, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 1. Derecho comparado.

País	Año	Ley	Objeto
Argentina	2014	Código Civil de la República Argentina (Argentina, 2014)	Artículo 437. Divorcio. Legitimación El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.

País	Año	Ley	Objeto
			<p>Artículo 438. Requisitos y procedimiento del divorcio</p> <p>Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición.</p> <p>Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta.</p> <p>Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estimen pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.</p>
Nicaragua	2014	CÓDIGO DE FAMILIA (Nicaragua, 2014)	<p>Art. 137 Disolución del matrimonio. El matrimonio se disuelve:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Por sentencia firme que declare la nulidad del matrimonio. b) Por mutuo consentimiento. c) Por voluntad de uno de los cónyuges.

País	Año	Ley	Objeto
			d) Por muerte de uno de los cónyuges.
México- Estado de Nuevo León	2018	Código Civil para el Estado de Nuevo León (Estado de Nuevo León, 2014)	Artículo 267.- y por mutuo consentimiento, cuando se solicita de común acuerdo en forma judicial o administrativa en los términos de este Código, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y de la Ley del Registro Civil del Estado
España	2005	Ley 15 de 2005 (España, 2005)	<p>Artículo primero. Modificación del Código Civil en materia de separación y divorcio. El Código Civil se modifica en los siguientes términos:</p> <p>Dos. –El artículo 81 queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 81. Se decretará judicialmente la separación, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio: 1.º A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. A la demanda se acompañará una propuesta de convenio regulador redactada conforme al artículo 90 de este Código. 2.º A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. No será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. A la demanda se acompañará propuesta fundada de las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación».</p>



Fuente: Elaboración realizada por las Unidades de Trabajo Legislativo, basados en la información disponible de cada país y en ANDERS (2004).

Por otro lado, el divorcio unilateral ya ha sido discutido en el plano jurisprudencial. Durante el análisis de los cargos que fundamentaron la expedición de la Sentencia C-394 de 2017 se tuvo la oportunidad de analizar si el régimen de culpabilidad que sustenta el divorcio en Colombia implicaba una afectación al libre desarrollo de la personalidad, pero se terminó por proferir un fallo contrario a estos postulados, pues consideró que las expresiones demandadas del artículo 156 del Código Civil, no desconocían el derecho al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que incumple sus deberes, pues resultaban ser una restricción admisible desde la óptica constitucional. Sin embargo, en aquella oportunidad el Magistrado Alberto Rojas Ríos salvaría voto para expresar sus argumentos y apartarse del fallo, argumentos que han servido para orientar esta discusión en el plano constitucional y legal, los cuales se podrían resumir en los siguientes postulados (Rojas Ríos, 2017):

“El respeto por la autonomía de la persona humana es una categoría fundante que da lugar a que el juez pueda decretar el divorcio por la sola voluntad de uno de los contrayentes y, en ese sentido, la ley no puede inmiscuirse en la decisión libre de un cónyuge de divorciarse unilateralmente bajo criterios obsoletos de incumplimiento o culpabilidad que son a todas luces inconstitucionales. Es inconcebible que en el siglo XXI la función jurisdiccional se estanque en la culpabilidad para la terminación del matrimonio, siendo que en la práctica el vínculo de todos modos finaliza, sin importar quien lo provoque”. (Sentencia C-394, 2017).

(...) “La determinación de celebrar un matrimonio, al igual que aquella de mantenerlo o darlo por terminado, modificando de esta forma su estado civil y pudiendo crear una nueva familia, son decisiones íntimas del individuo, directamente vinculadas con su proyecto de vida, y en tal sentido, manifestaciones del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que el legislador no puede imponer barreras desproporcionadas, encaminadas a evitar que uno de los cónyuges pueda dar por terminado unilateralmente el vínculo matrimonial, cuando quiera que desee iniciar un nuevo proyecto de vida, sólo o con otra pareja” (Sentencia C-394, 2017).

De otra parte, como lo menciona Rojas Ríos (2017) en sus argumentos del salvamento de voto, es pertinente mencionar que el matrimonio y la figura de la familia, como tantas otras instituciones sociales que respaldan el ejercicio de derechos, también están sujetas a los cambios sociales que viven las sociedades a lo largo de su historia, por lo que estas no deberían ser interpretadas de manera estática, sino de manera dinámica.

Recordemos también que Colombia es un Estado pluralista que reconoce diferentes modelos de vida, lo que limita el paternalismo del Estado y hace que las medidas perfeccionistas sean excluidas del ordenamiento jurídico (Sentencia C-309/1997). Esa misma pluralidad hace que en Colombia solo sea aceptable adoptar medidas de protección



que, sin imponer modelos de vida, busquen proteger los intereses propios y de terceros obligando a ejecutar ciertas medidas a favor de estas personas, como lo son, por ejemplo: la adopción de la educación primaria obligatoria; el cinturón de seguridad; la irrenunciabilidad de derechos laborales, etc., tal y como lo señala la Corte Constitucional (1997) en la referida sentencia.

En ese sentido, teniendo en cuenta lo planteado por Sergio Núñez (2021) en su escrito para la Universidad de San Francisco de Quito, sería importante cuestionarse si el modelo causalista del divorcio se trata de una medida perfeccionista, o si por el contrario, se trató de una política de protección del Estado que resulta ser aceptable en aras de garantizar los derechos y obligaciones que surgen del matrimonio y, por supuesto, si al proteger este fin constitucionalmente válido no se estaría adoptando una medida que es desproporcionada para aquel cónyuge que se le obliga a mantener el vínculo matrimonial, al no tener causal para solicitar el divorcio, o teniéndola decide no invocarla.

Finalmente, con la implementación del divorcio incausado/unilateral en Colombia no busca desproteger a las familias, ni facilitar la división familiar, sino permitir el respeto por la libertad individual y la autonomía para quien decide dejar de estar en un matrimonio. La búsqueda del fortalecimiento de la familia como institución no pasa por limitar las causales del divorcio, sino por mejorar las dinámicas sociales que hoy afectan directamente a las familias colombianas (Lopera Bonilla O, 2016).

Violencia Intrafamiliar

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las cifras de violencia intrafamiliar no dan tregua. En el 2020, los casos se posicionaron en un total de 112.481, en el 2021 121.727 casos fueron denunciados, en el 2022 se presentó un incremento teniendo un total de 131.008 casos, en lo que va del 2023 - a corte de julio- la cifra alcanza los 70.073.

Estadísticas matrimonios y divorcios

Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en el 2020 hubo 16.554 divorcios, en el 2021 hubo 27.737, en el 2022 la cifra alcanzó los 27.679; y en lo que va del 2023 -con corte a mayo- el número está en 9.076.

Por su parte, las cifras de matrimonios muestran que en el 2020 hubo 34.525, en el 2021 los matrimonios ascendieron a 67.768, en el 2022 hubo 70.208 ceremonias y en lo que va del 2023 - con corte a mayo- 24.472, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro.

Reparaciones económicas

El Proyecto de ley también busca acoger el exhorto realizado por la Corte Constitucional al Congreso de la República en lo que se refiere a la posibilidad de solicitar compensaciones económicas y simbólicas a favor de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. La sentencia SU 080 de 2020, señaló al respecto: *“La Corte encuentra prudente y oportuno, respetando desde luego las competencias legislativas del Congreso de la República, el*



exhortar para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa, en frente de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, regule el derecho fundamental de esta a acceder a una reparación, por medio de un mecanismo judicial dúctil, expedito, justo y eficaz, que respete los parámetros de debido proceso, el plazo razonable, y la prohibición de revictimización, dentro de los trámites de divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio católico”.

La Corte Constitucional consideró que la ausencia de un mecanismo justo y eficaz para procurar la reparación de daños generados por materialización de la causal de los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra vulnera el artículo 42.6 Constitucional y el artículo 7 literal g de la Convención Belén Do Pará, que se incorpora a nuestro ordenamiento por vía del bloque de constitucionalidad.

En cuanto a la Convención de Belén Do Pará se indicó: “(...) *La violencia cometida contra la mujer y la necesidad de su erradicación ha estado en el foco del derecho internacional bajo el entendido de que “la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.”*[122] De esta forma se puede resaltar el surgimiento de instrumentos jurídicos internacionales encaminados a sancionar y eliminar toda forma de discriminación y violencia contra la mujer, gracias al trabajo que han desarrollado, entre otras, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer como ente de la Organización de Naciones Unidas[123].

La Convención de Belén do Pará se ratificó por Colombia por medio de la Ley 248 de 1995. En su preámbulo, los Estados parte, hicieron una serie de manifestaciones todas ellas de absoluta relevancia para comprender el contexto, el propósito y el contenido de la convención. Allí se entiende que la violencia contra mujer comprende “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”[124]y describe tres tipos de violencia[125], la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica; y visibiliza tres ámbitos donde se manifiesta esta violencia así: i) en la vida privada cuando la violencia se ejerce dentro de la familia, la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, aun cuando el agresor ya no viva con la víctima; ii) en la vida pública cuando la violencia es ejercida por cualquier persona, ya sea que esta se lleve a cabo en la comunidad, en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar y finalmente, iii) la violencia perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra:

En el artículo 7º de dicha Convención se consagran las obligaciones a las que los Estados Parte se comprometieron. En lo que ahora más importa:

- a) (...)
- c) *Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las*



de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;
d) (...)

g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y (...)

En ese sentido, y teniendo en cuenta que se cumplen con los presupuestos de identidad de materia, se propone incorporar a la legislación colombiana un mecanismo eficaz que permita a las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar solicitar reparaciones económicas y simbólicas, garantizando sus derechos a la reparación por los daños causados.

Por otro lado, en materia de reparaciones económicas el proyecto también busca atender lo establecido por la Corte Constitucional al Congreso de la República en la Sentencia C-985 de 2010, en donde se declaró que el artículo 156, objeto de esta reforma, era condicionalmente exequible bajo el entendido que la demanda de divorcio, con fundamento en las causales allí enunciadas, se puede presentar en cualquier tiempo, con la salvedad que los reconocimientos económicos solo se podrán solicitar dentro de los términos de caducidad que allí se establecen. De igual forma, se establece la posibilidad de que a través de un debate probatorio pueda exonerarse del cumplimiento de la caducidad cuando no fuera posible alegar en la oportunidad debida la causal respectiva.

REFERENCIAS

ANDERS, S. R. (2004.). "The Cyclical Nature of Divorce in the Western Legal Tradition". *Loyola Law Review*, Vol. 50, 2004.

Argentina. (08 de 10 de 2014). Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994.

Beltrán y Puga Murai, A. L. (2020). *Movilización feminista y derecho de familia: la regulación del divorcio civil en Colombia (1930-1991)*. Obtenido de: <http://hdl.handle.net/1992/41235>

Corte Constitucional. C-394 de 2017 *Salvamento de Voto Magistrado Alberto Rojas (Corte Constitucional 2017)*.

Corte Constitucional. (21 de junio de 2017) *Sentencia C-394 de 2017. M,P: Diana Fajardo Rivera*.

Corte Constitucional. (2 de diciembre de 2010). *Sentencia C-985. M,P: Jorge Pretelt*.

Concejo de Estado. Sala Contenciosa Administrativa del Concejo de Estado *Sentencia 02830. M.P.: Carlos Enrique Moreno (2019)*.



Corte Constitucional, (20 de octubre de 2016), Sentencia T-574. M,P: Alejandro Linares Cantillo.

Corte Constitucional, (25 de junio de 1997), Sentencia C.309 M,P: Alejandro Martínez Caballero.

Congreso de Colombia. Ley 25 de 1992, Por la cual se desarrollan los incisos 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 42 de la Constitución Política.

Congreso de Nicaragua. (24 de junio de 2014). Código de Familia. Ley N° 87.

España. (2005). Ley 15 de 2005. Por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.

Estado de Nuevo León. (2014). Código Civil. Número 112.

Helí Abel Torrado (2018). El divorcio en Colombia Cumplió 25 años. Obtenido de: <https://www.ambitojuridico.com/noticias/analisis/civil-y-familia/el-divorcio-en-colombia-cumplio-25-anos>

Lopera Bonilla O, (2016). Reflexiones del Divorcio en Colombia. Obtenido de: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/2368/2141>

Paola Ruiz Manotas (2017). EL divorcio en Colombia y su relación con el posicionamiento social de la mujer. Universidad del Norte.

Núñez Dávila, S. (2021) «Divorcio incausado: una urgente actualización normativa». USFQ Law Review, Vol 8, no 2, octubre de 2021, pp. 157-181. Obtenido de: <https://revistas.usfq.edu.ec/index.php/lawreview/article/view/2280/2877>

3. CONFLICTO DE INTERESES

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992, se hacen las siguientes consideraciones:

Se estima que de la discusión y aprobación del presente Proyecto de Ley no podría generarse un conflicto de interés en consideración al interés particular, actual y directo de los congresistas, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad; segundo de afinidad o primero civil, por cuanto se tratan de disposiciones de carácter general.

Sobre este asunto ha señalado el Consejo de Estado (2019):

“No cualquier interés configura la causal de desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo será aquél del que se pueda predicar que es directo, esto es, que por se le alegado beneficio, provecho o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue conocido por el legislador; particular, que el mismo sea específico o personal, bien para el congresista o quienes se encuentren relacionados con él; y actual o inmediato, que concurra para el momento en que ocurrió la participación o



votación del congresista, lo que excluye sucesos contingentes, futuros o imprevisibles. También se tiene noticia que el interés puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico o moral, sin distinción alguna”.

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 5 de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, modificado por el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019:

“Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista”.

Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”

Se recuerda que la descripción de los posibles conflictos de interés que se puedan presentar frente al trámite del presente proyecto de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 291 de la ley 5 de 1992 modificado por la ley 2003 de 2019, no exime al Congresista de identificar causales adicionales.

4. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

La iniciativa que se somete a consideración del Congreso de la República, contiene en su texto cuatro (5) artículos.

El Artículo 1º, se ocupa de describir el objetivo del proyecto.

El Artículo 2 adiciona una causal de divorcio.

El Artículo 3º modifica la disposición para la legitimación y oportunidad para presentar la demanda de divorcio.

El Artículo 4º modifica la disposición sobre los efectos del divorcio.

El Artículo 5º modifica la disposición frente a los alimentos.

El Artículo 6º establece la extensión y aplicación al divorcio de mutuo acuerdo, así como en la unión marital de hecho.

El Artículo 7º contiene la vigencia y derogaciones.

Cordialmente,

<p><i>Katherine Miranda</i> KATHERINE MIRANDA PEÑA Representante a la Cámara por Bogotá Partido Alianza Verde</p>	<p><i>(Signature)</i> DAVID LUNA SÁNCHEZ Senador de la República</p>
---	--

SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss Ley 5ª de 1.992)

El día 02 del mes Agosto del año 2023

se radicó en este despacho el proyecto de ley
Nº 064 Acto Legislativo Nº _____, con todos y

cada uno de los requisitos constitucionales y legales

por: HS: David Luna Sanchez HR: Katherine Miranda

Peña

(Signature)
SECRETARIO GENERAL